

ideas & voces

editorial

LA PROPUESTA DE DESAPARECER LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES (OPLES) vuelve a la mesa del debate político en México. Y aunque para algunos suena como una medida de “austeridad” o de “eficiencia administrativa”, la verdad es que el costo real podría ser mucho más alto de lo que se imagina: el debilitamiento de la democracia en los estados.

Los OPLES han sido, desde su creación, una pieza clave para garantizar que las elecciones locales se desarrollen con cercanía, conocimiento del territorio y sensibilidad hacia las particularidades de cada entidad. Nadie mejor que ellos conoce la dinámica política de un municipio remoto, la complejidad logística de instalar casillas en comunidades rurales o la necesidad de traducir materiales a lenguas indígenas.

Centralizar todas esas tareas en un solo órgano nacional no solo resultaría engorroso, sino que aumentaría el riesgo de errores y desconfianza ciudadana.

Además, los OPLES han jugado un papel fundamental en la vigilancia de los partidos locales, en la fiscalización de campañas pequeñas y en la atención directa a ciudadanos que acuden a presentar quejas o solicitar información.

Si desaparecen, ¿a quién acudiría un ciudadano de una comunidad alejada que quiere denunciar una irregularidad electoral? ¿Tendría que esperar a que desde la Ciudad de México alguien atienda su caso? Esa distancia no es solo geográfica, es también simbólica: enviaría el mensaje de que la voz local pesa menos que la lógica nacional.

Otro punto delicado es la confianza. En un país marcado por la desconfianza hacia las instituciones, la presencia de órganos locales con autonomía ha permitido equilibrar tensiones políticas y dar certidumbre en los conteos. Quitar esa figura podría interpretarse como un intento de centralizar el control político de las elecciones, debilitando el principio de pluralidad que tanto costó construir.

Es cierto que los OPLES no están exentos de críticas: exceso de burocracia, altos salarios en algunos casos o decisiones polémicas. Pero la solución no es desaparecerlos, sino fortalecerlos, corregir sus deficiencias y garantizar que funcionen con transparencia. Tirar por la borda una estructura que ha demostrado eficacia en múltiples procesos sería un retroceso peligroso.

En democracia, las instituciones son como los cimientos de una casa: pueden tener grietas y requerir ajustes, pero destruirlos implica poner en riesgo toda la estructura. Desaparecer los OPLES significaría apostar por un modelo centralista que podría dejar a millones de ciudadanos sin representación efectiva y abrir un flanco de incertidumbre en los comicios locales.

La democracia mexicana no se fortalece con menos instituciones, sino con mejores instituciones.